

# **La justicia electoral y la protección de los derechos políticos-electorales de las personas con discapacidad en México durante el proceso electoral 2023-2024**

Ambar Escobar España<sup>1</sup>  
Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz<sup>2</sup>

## **Sumario**

### **I. Introducción. II. Algunas consideraciones teóricas sobre acciones afirmativas III. Casos relevantes. IV. Consideraciones Finales. V. Fuentes**

La justicia electoral en México ha avanzado significativamente en las últimas décadas, aunque aún enfrenta retos importantes, especialmente en lo que respecta a la inclusión y protección de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. En ese orden de ideas, durante el proceso electoral 2023-2024 se han implementado diversas acciones y medidas que buscan garantizar que este grupo social pueda ejercer sus derechos político-electorales de manera efectiva; especialmente a través de acciones que posibilitan el acceso de éstos a los distintos cargos de elección popular.

Por lo anterior, el objetivo de la presente es reflexionar en torno al impacto que han tenido las sentencias sobre acciones afirmativas aplicadas durante el proceso electoral 2023-2024 en relación con grupos que históricamente han sido considerados sub representados, entre los que se encuentran las personas con discapacidad; ya que es la segunda ocasión que la mayoría de las acciones afirmativas en comento (con excepción a las correspondientes a grupos y comunidades indígenas) se aplican en México, y la primera vez que sucede en comicios concurrentes en la renovación de representantes a nivel nacional y subnacional. En ese sentido, el seguimiento a las impugnaciones a las nuevas cuotas electorales, particularmente enfocadas en personas con discapacidad; permite verificar los aportes que la justicia electoral realiza en aras de una democracia inclusiva.

Este análisis comprende las siguientes fases o momentos del proceso electoral. El primero, referido a las sentencias que les recayeron a las impugnaciones respecto de los lineamientos para las postulaciones de personas con discapacidad; el segundo, abarca las resoluciones

---

<sup>1</sup> Estudiante del Doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

<sup>2</sup> Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

previas a la jornada electoral en relación con las personas con discapacidad y las candidaturas postuladas por las diversas fuerzas políticas; la fase concerniente a la jornada de votación, en la que las autoridades administrativas realizan, los eventuales recuentos de votación, los cómputos y la asignación de escaños en los poderes legislativos; y por último, el ciclo de impugnaciones relativo a las asignaciones posteriores a la jornada electoral.

En suma, la importancia de analizar sobre estos actos susceptibles de impugnación, sujetos de observación y seguimiento, reside en observar la manera en que las autoridades interpretan y aplican los lineamientos que fueron consolidados en la etapa de la preparación de la elección, siendo la sede jurisdiccional la encargada de resolver respecto a las demandas y la adjudicación de espacios para las personas con discapacidad en cuanto a las fuerzas políticas.

## **II. Algunas consideraciones teóricas sobre acciones afirmativas**

Para hablar de justicia electoral y protección de los derechos político-electorales en México, particularmente de las personas con discapacidad, primeramente, se debe hacer referencia a los mecanismos que han permitido que durante los procesos electorales ciertos grupos considerados como históricamente relegados, hoy en día, tengan condiciones jurídicas y materiales de participar políticamente, mediante el acceso a distintos cargos y espacios públicos. Por tanto, se estima necesario realizar algunas consideraciones teóricas que contribuyan a comprender la dimensión de las acciones afirmativas y su incorporación en el sistema político mexicano en favor de estos grupos.

En ese sentido, desde hace algunas décadas, se ha emprendido una contienda desde distintas latitudes, con el propósito de que los Estados incorporen, progresivamente, diversas medidas para combatir y resarcir las desigualdades, producto de la discriminación generalizada hacia ciertos grupos o sectores de la población; sin embargo, para abordar estos tópicos, conviene dilucidar algunas ideas, respecto al concepto de *desigualdad*, ya que se trata de un término complejo, presente en los debates contemporáneos, que deviene, en primer lugar, de dilucidar sobre la noción de igualdad.

La igualdad es un derecho fundamental, derecho humano y principio básico de todo estado liberal y democrático; una pieza fundamental en la búsqueda de la justicia y un elemento indispensable para garantizar el estado constitucional de derecho. Así, este concepto se

manifiesta en dos vertientes: igualdad formal e igualdad material o sustantiva. Mientras que la igualdad formal se refiere a la idea de que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera en términos legales (igualdad ante la ley, igualdad en la aplicación de la ley, igualdad en el contenido de la ley, y el mandato de no discriminación) bajo la premisa de que todos los individuos son iguales en términos de derechos y obligaciones y, por ende, merecen las mismas oportunidades y condiciones de conformidad con el sistema jurídico; la igualdad sustantiva, por otro lado, va más allá de la mera igualdad normativa y se enfoca en reconocer las diferencias que trascienden al plano fáctico.<sup>3</sup>

Este segundo concepto evidencia la existencia de desigualdades estructurales y sociales que pueden impedir que algunas personas ejerzan plenamente sus derechos, incluso en un marco legal que promete igualdad y, como consecuencia, busca implementar políticas y acciones específicas que reconfiguren las asimetrías existentes en el campo social para garantizar mejores condiciones para toda la población (en el plano teórico igualdad de oportunidades y resultados; en el plano práctico igual satisfacción de necesidades básicas e igualdad en la consecución de los logros personales y en los fines sociales).<sup>4</sup>

Bajo este contexto, estos dos tipos de igualdad: formal y material, también se complementan entre sí para intentar atemperar alguna de las desigualdades existentes y construir sociedades más justas y equitativas, desde la dimensión formal, mediante la proporción de un piso legal y el establecimiento de límites legislativos en los que se prohíbe cualquier tipo de discriminación por motivos de raza, género, religión, orientación sexual, discapacidad, entre otros. Incluso, se ha propuesto hablar del derecho anti-discriminatorio, un tema relativamente nuevo en México cuya base es la dignidad humana; entendido como la serie de normas y doctrinas relativas a la garantía de la igualdad entre las personas y el combate a la desventaja que experimentan ciertos grupos.<sup>5</sup>

Por su parte, la manifestación sustantiva de la igualdad busca compensar estas disparidades sociales para hacer más asequibles, en la realidad, los derechos humanos, las condiciones y

---

<sup>3</sup> Cfr., Pérez Portilla, Karla. Principio de igualdad: alcances y perspectivas, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2005, pp. 137-142.

<sup>4</sup> *Ibidem*, pp. 142-176.

<sup>5</sup> Para mayor profundidad del tema véase Pérez Portilla, Karla, “Más allá de la igualdad formal: Dignidad humana y combate a la desventaja”, en Jorge Carpizo y Carol B. Arriaga (Coords.), Homenaje al Doctor Emilio O. Rabasa, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2010, pp. 655-674.

las oportunidades que permiten reclamar este ideal de justicia social, lo que se logra a través de la implementación de medidas específicas, tales como programas, políticas públicas y acciones afirmativas, entre otros. Respecto a este último tópico, las acciones afirmativas pueden ser vistas como estrategias destinadas a ampliar y profundizar la participación democrática desde diversos ámbitos y esferas, buscando primordialmente corregir, en determinado momento, ciertas discriminaciones de origen racial, étnico, de género, discapacidad, edad, entre otros; dependiendo de la sociedad en la que se hayan desarrollado las luchas sociales y los grupos que se identifiquen con ellas, mismos que reivindican la condición humana y el derecho a ser igualmente libres y dignos.<sup>6</sup>

En esa misma línea, estas estrategias pueden ser concebidas como “cualquier medida, más allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria, adoptada para corregir o compensar discriminaciones presentes o pasadas o para impedir que la discriminación se reproduzca en el futuro”.<sup>7</sup>

De igual manera, existen otros instrumentos internacionales que prevén este tipo de acciones para favorecer particularmente al grupo de interés de la presente ponencia, es decir, las personas con discapacidad, poniendo especial énfasis en algunos de ellos, tales como la Convención Interamericana para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismas que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Así, este instrumento presenta un enfoque de derechos, plantea el modelo social de la discapacidad y recoge un modelo complejo entre promoción de derechos, acciones afirmativas y prohibición de la discriminación por razón de discapacidad.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Igualmente sirve de referencia el Documento técnico de trabajo emitido por la Secretaría General de Acuerdos del TEPJF intitulado *Acciones afirmativas establecidas para compensar la desventaja histórica a la que se han enfrentado diversos grupos vulnerables en México*, disponible en: <https://www.te.gob.mx/lineasjuris/media/pdf/b8bd2c01e7d57f6.pdf>

<sup>7</sup> Victoria Maldonado, Jorge A., *Hablemos sobre discapacidad y derechos humanos*, México, Cámara de Diputados CEDIP, 2015, p. 185 *apud* Santiago Juárez, Mario (coord.), *Igualdad y acciones afirmativas*, México, CONAPRED, 2011, p. 197.

<sup>8</sup> Victoria Maldonado, Jorge A, *op. cit.*, p. 221.

De hecho, estas Convenciones prevén que no se considere discriminación, los mecanismos que se empleen con la finalidad de resarcir las desigualdades en favor de este grupo de la población, tal y como indica el artículo 5.4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al estipular que no serán discriminatorias, en virtud de ese documento las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.<sup>9</sup>

No pasa inadvertido que el Estado mexicano cuenta con un andamiaje normativo en la materia, tal como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que dispone, en su artículo 5º, que no se consideran conductas discriminatorias la incorporación de acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad de oportunidades.

Una vez trazado este contexto teórico, se presentan algunos casos que permiten identificar las acciones afirmativas que se implementaron en el proceso electoral 2023-2024 para posibilitar la protección de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, cómo se resolvieron en sede jurisdiccional y, destacando, la manera en que se interpretaron y aplicaron los criterios en dichas acciones para que este sector se encontrara en condiciones de igualdad en la participación en la contienda electoral.

### **III. Casos relevantes**

Como se explicó con anterioridad, las acciones afirmativas son políticas y medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades y la inclusión de grupos históricamente discriminados. Por añadidura, el propósito de estas estrategias supone una compensación respecto a desventajas sociales, económicas y educativas, entre otras; garantizando así un acceso equitativo a derechos y recursos; que, para efectos de la ponencia que nos ocupa, se enfoca en personas con discapacidad.

En este sentido el Instituto Nacional Electoral, a través del acuerdo INE/CG625/2023<sup>10</sup> emitió las pautas para asegurar, en materia político electoral, que ciertos grupos sociales,

---

<sup>9</sup> *Ídem.*

<sup>10</sup> Instituto Nacional Electoral. 25 de noviembre de 2023. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS EXPEDIENTES SUP-JDC-338/2023 Y ACUMULADOS, SE EMITEN LOS CRITERIOS

accedieran, mediante acciones afirmativas, a los distintos cargos a través de la obligación de guardar una prelación prioritaria en la postulación de candidaturas trasladadas en cuotas electorales para ocupar distintos cargos; sin embargo, este acuerdo y sus alcances no estuvieron exentos de encontrar dificultades al momento de su aplicación, especialmente bajo las complejidades que guarda nuestro sistema jurídico, lo que, además de motivar una serie de impugnaciones en las distintas fases del proceso electoral 2023-2024, a las que previamente se ha hecho referencia; también ha significado diversos desafíos en el devenir futuro.

Bajo este contexto, se expondrán brevemente, algunos de los casos relevantes durante el proceso electoral 2023-2024 con la finalidad de dar a conocer los criterios bajo los cuales se han conducido las autoridades jurisdiccionales al momento de interpretar estas acciones afirmativas en favor de las personas con discapacidad y observar qué tanto se preservaron o garantizaron los derechos de las personas en dicha condición.

En relación con la **primera fase**, por lo que se refiere a la impugnación de los lineamientos que dieron lugar a las acciones afirmativas descritas, se puede mencionar como referencia, el juicio local electoral en el Estado de Sonora **JDC-SP-06/2024** (así como los expedientes G-JDC-171/2024 y acumulados; y posteriormente SG-JDC-244/2024) mismo que pretendía revocar el acuerdo CG47/2024 con la intención de que se dictara un acuerdo distinto que ampliara la acción afirmativa implementada y se impusiera el deber a los partidos políticos para que postularan al menos tres fórmulas de personas integrantes de la comunidad de personas con discapacidad por el principio de mayoría relativa y dos por el principio de representación proporcional en la elección de diputaciones al Congreso del Estado de Sonora. No obstante, la autoridad confirmó el acuerdo en cita y se mantuvo el *status quo*.

Con relación a la **fase de registro de candidaturas**, con fecha 27 de mayo del presente año, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió distintos asuntos relacionados con las acciones afirmativas en favor de personas con discapacidad. De este modo, se examinan primeramente **los expedientes SX-JDC-**

---

APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR QUE SOLICITEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES, ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2023-2024. Disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/156945>

**467/2024 y SX-JDC-468/2024 acumulados**, resueltos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en los que la parte actora buscaba controvertir diversa sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo que revocó, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo por el que se aprobó la solicitud de registro de la planilla de candidaturas a miembros del aludido ayuntamiento, en el contexto del Proceso Electoral Local 2024, en específico, respecto de la fórmula de la primera regiduría propietaria y suplente con motivo de la acción afirmativa de personas con discapacidad. Al respecto, el criterio adoptado por la Sala Regional determinó confirmar la sentencia impugnada, al considerar que el Tribunal responsable sí había realizado una correcta valoración de las constancias que consideró importantes para tener por *no* acreditada la discapacidad de las actoras.

La decisión de la autoridad electoral resolutora, tuvo como principal fundamento la falta de cumplimiento de lo establecido en el punto décimo segundo de los “criterios de acciones afirmativas” establecidos por el Instituto local, que refieren el carácter permanente de las discapacidades, lo anterior como resultado de la revisión a los certificados médicos aportados, ya que, del contenido de estos, no se observó expresión alguna en relación con la permanencia de la discapacidad.<sup>11</sup>

De este asunto es importante evidenciar que el criterio que se ha seguido en la materia electoral ha consistido en examinar los certificados médicos presentados, así como las características intrínsecas de las personas postuladas, más no en evaluar las discapacidades aludidas, para que con base en ello se precise cuáles merecen o no ser representadas mediante la acción afirmativa, por lo que para la autoridad jurisdiccional, el certificado médico se ha constituido como una prueba fundamental para acceder a la acción afirmativa; y, por lo tanto, su decisión se centra en la revisión puntual de los requisitos que deben reunir estos documentos, ya que de lo contrario, se ha tendido a la revocación del registro otorgado.<sup>12</sup>

Por su parte, se examinaron los expedientes **SX-JRC-46/2024 y acumulado**<sup>13</sup>, promovidos por el Partido Verde Ecologista de México, así como por José Ángel Castillo Cruz y Martín

---

<sup>11</sup> SX-JDC-467/2024 y SX-JDC-468/2024 acumulados. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa, 27 de mayo de 2017, disponible en: <https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SX-JDC-0467-2024->

<sup>12</sup> [https://www.te.gob.mx/media/estenograficas/xalapa/xve\\_27520241400.pdf](https://www.te.gob.mx/media/estenograficas/xalapa/xve_27520241400.pdf)

<sup>13</sup> SX-JRC-46/2024 y acumulado. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa, 27 de mayo de 2024, disponible en:

Albino Mendoza Aquino, en su calidad de candidatos propietarios suplentes por el partido político mencionado para el proceso electoral 2023-2024 mediante la acción afirmativa de discapacidad. En este caso, la parte actora buscaba controvertir una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que a la vez revocaba un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la citada entidad, en el que se aprobó el registro de las candidaturas de los ciudadanos actores.

Sobre el particular, la Sala Regional Xalapa decidió declarar fundado el agravio sobre la indebida fundamentación y motivación, ya que consideró incorrecto que el Tribunal local desestimara el contenido de los certificados que presentaron los candidatos al momento de su registro con apreciaciones subjetivas sobre su contenido, por lo que a juicio de la Sala Regional, la autoridad responsable inobservó la presunción legal que gozan dichos documentos al ser expedidos por una institución pública de salud del estado de Oaxaca, tal y como se exige en la normatividad aplicable. Por tanto, la autoridad jurisdiccional competente, decidió revocar la sentencia del Tribunal Electoral del estado de Oaxaca y, en consecuencia, restituir el registro de las candidaturas cuestionadas.<sup>14</sup>

Bajo el mismo sentido, los juicios de la ciudadanía 455 y su acumulado el 493 del 2024, promovidos por Sarahú Peñaloza López, en su calidad de candidata a primer concejal por el municipio de Santiago Huajolotitlán, Oaxaca, postulada por el Partido del Trabajo, quien controvertió la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que, a su vez, revocaba el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado relativo al registro de dicha actora.

En suma, los agravios de la promovente consistieron en evidenciar una indebida motivación de la sentencia impugnada respecto de las razones por las cuales el Tribunal local determinó que el certificado médico exhibido no cumplía con los requisitos establecidos en los lineamientos para acreditar su discapacidad en tanto a juicio de la autoridad responsable, no se habían aportado elementos de cómo dicha condición afectaba su calidad de vida.

---

<https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/xalapa/SX-JRC-0046-2024.pdf>

<sup>14</sup> *Ibidem*.



La resolución de la Sala Regional consistió en declarar fundado el planteamiento hecho por la actora, toda vez que fueron incorrectas las razones que esgrimió la autoridad responsable, pues únicamente invalidó la discapacidad permanente de la actora bajo la ausencia de pruebas de que dicho padecimiento afectara su calidad de vida; cuando, de acuerdo con la sentencia de la Sala, el elemento principal de la auto adscripción es que se atienda al principio de buena fe, por lo que aun cuando no se hubiera especificado en el certificado médico que la discapacidad visual degenerativa padecida fuera permanente, ese solo hecho resulta insuficiente para estimar que no se ubica en la hipótesis necesaria para ser postulada como perteneciente a un grupo con discapacidad.

Por tanto, la Sala Regional estimó que el certificado médico presentado por la actora en el registro era un elemento que por sí solo resultaba suficiente para acreditar su condición ya que dicho documento era el único requisito establecido en los lineamientos por el que se tenía que acreditar la discapacidad, por lo que se concluye que la actora cumplió con tal requisito y se ordenó revocar la sentencia impugnada.

Con estos casos, es posible corroborar lo previamente argumentado respecto de la línea argumentativa que se ha adoptado en materia de derechos político-electorales en el ámbito jurisdiccional con la finalidad de establecer ciertos criterios que definan quienes deben ocupar los espacios políticos.

En otra línea, se examina el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía **SUP-JDC-354/2024**, resuelto por la Sala Superior del TEPJF, en abril del 2024, en el cual la parte actora, Tito Omar Pacheco López, controversió el registro otorgado por el Consejo General del INE a Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, como candidata propietaria del PAN, respecto de una diputación federal de representación proporcional en la cuarta circunscripción del país. Esto bajo la acción afirmativa prevista a favor de las personas con discapacidad.<sup>15</sup>

Lo que antecede, cobra sentido bajo la perspectiva del demandante, en tanto la autoridad referida no debió aprobar tal registro debido a que, a juicio del actor, no se presentaron los

---

<sup>15</sup> SUP-JDC-354/2024 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior, 3 de abril de 2024, Disponible en: <https://www.te.gob.mx/media/pdf/cc21cf464fdff2f.pdf>

elementos objetivos necesarios para probar la discapacidad permanente de la candidata, cuyo padecimiento, según él, no era suficiente para acceder la acción afirmativa en comento.

Al respecto, la Sala Superior se avocó al estudio de las constancias aportadas por el PAN a la autoridad administrativa electoral nacional para registrar a la candidata, con la finalidad de resolver sobre su suficiencia al demostrar su condición de discapacidad. Como resultado de este ejercicio dicha Sala confirmó el registro de la candidatura impugnada, en virtud de haberse cumplido con ciertos elementos objetivos para demostrar la condición de discapacidad permanente, a saber: la exhibición de una constancia médica, de una copia legible de la credencial de la ciudadana, expedida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y una carta protesta firmada por aquella.

De forma diversa, el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía **SX-JDC-557/2024**, resuelto por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, el 19 de junio del 2024, promovido por Dante Montaña Montero, quien se ostentó como persona indígena, discapacitado y candidato a Diputado Propietario en la segunda posición por el principio de representación proporcional al Congreso del Estado de Oaxaca, postulado por el Partido del Trabajo; con la finalidad de controvertir la sentencia dictada por el Tribunal Electoral Estado de Oaxaca en la que se revocó el acuerdo IEEPCO-CG-91/2024, que había registrado su candidatura bajo la consideración de que no cumplía con los parámetros establecidos para pertenecer al grupo de personas con discapacidad y, por ende, no podía acceder a dicha postulación, vía esta acción afirmativa.<sup>16</sup>

El argumento de la autoridad responsable para justificar su decisión se constreñía a que, a su juicio, de la constancia exhibida por el actor no era posible advertir que el profesionista que la había expedido fuera parte de los servicios de salud o contara con la competencia y capacidad legal para emitir el documento en referencia, ni tampoco se especificaba el tipo y grado de incapacidad ni su carácter permanente; por lo que, a través de su resolución, ordenaba al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que notificara al PT con la finalidad de sustituir la candidatura postulada antes de la jornada electoral.

---

<sup>16</sup> SX-JDC-557/2024. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa, 19 de junio de 2024, disponible en: <https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/xalapa/SX-JDC-0557-2024.pdf>

En ese marco, la Sala Regional Xalapa determinó que era fundado el agravio aludido por la parte actora con base en la omisión de la autoridad electoral de valorar las pruebas con las que se había hecho valer su condición como persona perteneciente a las categorías sospechosas anteriormente mencionadas. Esto, debido a todo un estudio pormenorizado del marco normativo-contextual y de las pretensiones, argumentos y pruebas aportadas por las partes.

Cabe destacar que la autoridad resolutora, al momento de delimitar el marco jurídico aplicable, señaló, como parte de los criterios jurisprudenciales del principio de igualdad y no discriminación, la incompatibilidad de toda aquella situación que, por considerar superior a un determinado grupo, condujera a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, se le tratara con hostilidad o cualquier forma de discriminación en el goce de sus derechos que si se reconocen a quienes no se estiman incursos en tal situación.

Igualmente, la Sala Regional reiteró la protección que requieren aquellos grupos en situación de vulnerabilidad mediante la posibilidad establecida en el aparato normativo e internacional aplicable, que de hecho fue citada en un apartado anterior; para justificar un trato desigual en tanto se tratara de aquellas personas que no se encuentran en una paridad frente a los demás sujetos, lo que *ipso facto*, implica una distinción justificada, esto, siempre y cuando se cumplan con criterios de razonabilidad. De igual forma, la Sala referida hizo hincapié en la importancia de hacer uso de la herramienta de *juzgar con perspectiva de discapacidad*, puesto que permite analizar las situaciones a las que se enfrentan las personas que pertenecen a este grupo, lo que conlleva aplicar un régimen normativo de protección especial que garantice su participación social y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos.<sup>17</sup>

Con estos parámetros y aplicando un criterio garantista, en el que este caso cobró especial importancia para la autoridad resolutora, por tratarse de cuestiones que tienen afectaciones directas sobre las personas pertenecientes a un grupo de atención prioritaria, como las personas con discapacidad, y con la intención de conservar la línea jurisprudencial que las protege; la Sala ordenó revocar la sentencia emitida por el Tribunal local, reconociendo y conservando el registro en favor del actor como candidato a diputado propietario en la

---

<sup>17</sup> Párrafo 69. El énfasis es propio.

segunda posición por el principio de representación proporcional al congreso del estado de Oaxaca, postulado por el PT.

Otro de los asuntos que se propone examinar corresponde al juicio para la protección de los derecho político-electorales del ciudadano **SX-JDC-466/2024 y SX-JDC-483/2024 acumulados**, resueltos el 24 de mayo del 2024, por la Sala Regional Xalapa del TEPJF; promovidos por los actores José Luis Toledo Medina, quien se ostentó como otrora candidato a síndico municipal propietario del ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, por la coalición total “Fuerza y Corazón por Quintana Roo” y por el actor Jorge Edwin López Cuevas quien acudió por propio derecho.

En ese sentido, los actores controvirtieron la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Quintana Roo en el juicio de la ciudadanía local JDC/031/2024, en la que revocó el acuerdo IEQROO/CG/A-105-2024, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal en el que, entre otras cuestiones, se resolvió la solicitud de registro de la planilla de candidaturas a miembros del ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, presentada por la coalición “Fuerza y Corazón por Quintana Roo”, respecto al registro de acción afirmativa por discapacidad de José Luis Toledo Medina.

Así, la pretensión de José Luis Toledo Medina era que subsistiera su registro como candidato a miembro del ayuntamiento; mientras que los argumentos de Jorge Edwin López Cuevas consistían en desvirtuar los documentos con los que se había postulado el candidato en cuestión, en tanto, a juicio de López, no se satisfacía con los requisitos establecidos para tales efectos y, por ende, no debía concederse el registro vía la acción afirmativa correspondiente a personas con discapacidad.

Una vez que la Sala Regional revisó los juicios señalados, así como las pruebas aportadas por las partes, se dedicó a dilucidar sobre a cuál de las partes asistía la razón. Bajo esa tesitura, la autoridad jurisdiccional resolutoria decidió en favor José Luis Toledo Medina, actor del expediente SX-JDC-466/2024, lo anterior, bajo la consideración de que el Tribunal responsable había realizado una indebida valoración probatoria, ya los certificados exhibidos sí cumplían con los requisitos establecidos en la legislación de la materia y el hecho de que se exigiera cumplir con otros requerimientos obstaculizaba la propia finalidad de las acciones

afirmativas en favor de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Como consecuencia, la Sala determinó que el referido actor cumplía con los criterios de acción afirmativa de persona con discapacidad por lo que ordenó revocar la sentencia impugnada, dejar subsistente el Acuerdo controvertido en la instancia local y en tales circunstancias, restituir su registro como candidato.

Debe señalarse, que se presentaron algunos otros asuntos en donde se controvirtieron las candidaturas de personas registradas como discapacitados, por presuntamente aprovecharse de la figura y no pertenecer al grupo de personas con discapacidad, como en el caso César Abelardo Rodríguez Rincón, para diputado local por el principio de mayoría relativa por el distrito 04 en Colima, postulado por la Coalición “Fuerza y Corazón por Colima”.<sup>18</sup> En el presente asunto se controvirtió el retiro de su candidatura que realizó el Instituto Electoral local al indicar que su discapacidad, la cual consiste en baja visual y discapacidad visual asociada a secuelas de toxoplasmosis ocular en ojo izquierdo, no configuraba una discapacidad permanente. Sobre el particular, el Tribunal del Estado de Colima ordenó que se registrara al actor como candidato, ya que si configuraba dicha discapacidad, ya que de lo contrario no se estaría juzgando con perspectiva sensible a la comunidad perteneciente a un grupo de discapacidad.

#### **IV. Consideraciones Finales**

Como se pudo observar en el presente análisis, las acciones afirmativas para favorecer a las personas pertenecientes a grupos históricamente subrepresentados, se tornaron en una realidad jurídica, ya que tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales en materia electoral, emitieron lineamientos y criterios que tuvieron como objetivo en que dichos grupos atemperaran las desigualdades materiales y pudieran acceder a candidaturas en igualdad de circunstancias que las otras personas. Sin embargo, como se pudo advertir, esta igualdad jurídica tuvo dificultades para volverse una igualdad material.

En el caso particular de este análisis, se pudo observar que los partidos políticos postularon a personas como candidatos bajo el tamiz de discapacitados, no obstante, dichas candidaturas

---

<sup>18</sup> JDCE-33/2024. Tribunal Electoral del Estado de Colima. 25 de mayo de 2024. Disponible en: [https://tee.org.mx/data/RD\\_JDCE-33-2024\\_250524.pdf](https://tee.org.mx/data/RD_JDCE-33-2024_250524.pdf)

fueron controvertidas, al señalar que no se acreditaban suficientemente los criterios de discapacidad, tales como una discapacidad permanente, o que se tuviera un registro expedido por institución certificada para tal efecto, o que la discapacidad se tornara en una condición que le impidiera llevar su vida cotidiana con regularidad, situación que pudiera limitar la figura de la buena fe, respecto de su dicho o la auto adscripción de las personas al grupo de personas con discapacidad.

En este sentido, se pudo observar que los tribunales sostuvieron una posición garantista para favorecer el criterio de discapacidad de las personas, sin embargo, no pasa inadvertido, que el margen de posibilidad de que una persona pueda hacer ejercicio de un derecho, abusando de éste, no está exento tanto de interpretaciones como de posibles abusos a cargo de partidos políticos y candidaturas, por lo que se puede afirmar que la experiencia de asuntos que se resolvieron en tribunales donde se controvirtieron registros o candidaturas de personas con discapacidad todavía no está suficientemente explorado y se advierte que se tienen que generar pautas con mayores especificaciones para dejar de lado el margen de interpretación jurisdiccional y acrecentar la certeza de la norma desde un inicio, en favor de la exponenciación del derecho de las personas con discapacidad a ser votadas en condiciones de igualdad jurídica y material.

## **V. Fuentes**

*Acciones afirmativas establecidas para compensar la desventaja histórica a la que se han enfrentado diversos grupos vulnerables en México*, disponible en: <https://www.te.gob.mx/lineasjuris/media/pdf/b8bd2c01e7d57f6.pdf>

[https://www.te.gob.mx/media/estenograficas/xalapa/xve\\_27520241400.pdf](https://www.te.gob.mx/media/estenograficas/xalapa/xve_27520241400.pdf)

Instituto Nacional Electoral. 25 de noviembre de 2023. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS EXPEDIENTES SUP-JDC-338/2023 Y ACUMULADOS, SE EMITEN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A LOS DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR QUE SOLICITEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, LAS COALICIONES, ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO EN EL PROCESO ELECTORAL

FEDERAL 2023-2024. Disponible en:  
<https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/156945>

Pérez Portilla, Karla, *Principio de igualdad: alcances y perspectivas*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2005.

\_\_\_\_\_, “Más allá de la igualdad formal: Dignidad humana y combate a la desventaja”, en Jorge Carpizo y Carol B. Arriaga (Coords.), *Homenaje al Doctor Emilio O. Rabasa*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2010.

Tribunal Electoral del Estado de Colima. JDCE-33/2024. 25 de mayo de 2024. Disponible en: [https://tee.org.mx/data/RD\\_JDCE-33-2024\\_250524.pdf](https://tee.org.mx/data/RD_JDCE-33-2024_250524.pdf)

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior. SUP-JDC-354/2024, 3 de abril de 2024, Disponible en: <https://www.te.gob.mx/media/pdf/cc21cf464fdff2f.pdf>

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa. SX-JDC-467/2024 y SX-JDC-468/2024 acumulados. 27 de mayo de 2017, disponible en: <https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SX-JDC-0467-2024->

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa. SX-JDC-557/2024. 19 de junio de 2024, disponible en: <https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/xalapa/SX-JDC-0557-2024.pdf>

.Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa. SX-JRC-46/2024 y acumulado, 27 de mayo de 2024, disponible en: <https://www.te.gob.mx/media/SentenciasN/pdf/xalapa/SX-JRC-0046-2024.pdf>

Victoria Maldonado, Jorge A., *Hablemos sobre discapacidad y derechos humanos*, México, Cámara de Diputados CEDIP, 2015.